**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE CUNDINAMARCA**
SALA CIVIL – FAMILIA

Bogotá D.C., mayo veintitres de dos mil veintidós.

Proceso : Unión marital de hecho.
Radicación : 25183-31-84-001-2021-00140-01.

Se resuelve el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la demandante contra el auto proferido el 3 de diciembre de 2021 por el Juzgado Promiscuo de Familia de Soacha.

ANTECEDENTES

1. La señora Rosalba Cruz Contreras presentó demanda en contra de Javier Augusto Castañeda Garzón, solicitando que se decretara que entre ellos existió unión marital de hecho entre marzo de 2005 y el 14 de octubre de 2021, con el consecuente surgimiento de la sociedad patrimonial, la cual solicitó que se declara disuelta y en estado de liquidación.

Relató que las partes conformaron una comunidad de vida estable, permanente y singular con ayuda mutua, siendo reconocidos exteriormente como tal y siendo padres de D.F.C.C. y C.D.C.C., nacidos el 21 de mayo de 2006 y el 22 de octubre de 2014.

Como anexos aportó el registro de nacimiento de los hijos comunes, copia del documento de identidad de los ex miembros de la pareja y certificado de tradición del bien social, solicitando además para probar la existencia de la relación que se practicara el interrogatorio del demandado y que se recibiera el testimonio de Rosa Odilia Cruz López y Gloria Contreras.

Mediante auto del 12 de noviembre de 2021, la jueza de primera instancia inadmitió el libelo porque advirtió que no se había dado cumplimiento a los artículos 90 del C.G.P. y 6 del Decreto 806 de 2020, pues no se indicó el medio digital por el cual puede citarse a los testigos, ni aportó los registros civiles de nacimiento de los extremos procesales.

En término, el apoderado demandante informó que las testigos no tienen correo electrónico, siendo los números de teléfono indicados en la demanda los únicos medios de notificación con los que cuentan, allegando además el registro civil de nacimiento de la señora Contreras y sosteniendo que el del demandado debía obtenerlo él mismo.

2. El auto apelado

En auto del 3 de diciembre de 2021, la a-quo instancia advirtió que aun cuando se había manifestado que no era posible adjuntar el registro civil de nacimiento del demandado, debía “(sic) por lo menos señalar el lugar de ubicación del documento, para requerir a la autoridad correspondiente previo a calificar la demanda, carga procesal que no agotó, tampoco a través de derecho de petición”.

Entendiendo entonces que no se subsanó debidamente el libelo, la falladora lo rechazó, aplicando el artículo 90 ibidem.

3. La apelación

Inconforme con la decisión, el apoderado de la demandante interpuso el recurso de apelación, aduciendo que habida cuenta de las circunstancias en que se encontraba la señora Contreras debido a la ruptura de la relación con el accionado, no tenía conocimiento ni podía preguntarle

a su excompañero cuál es el lugar en el que inscribió su registro civil de nacimiento, a más de ser improcedente solicitar ese documento mediante derecho de petición.

CONSIDERACIONES

1. Es la demanda el instrumento con el que el actor ejercita su derecho de acción y hace efectivo el de acceso a la administración de la justicia. Por el rigor que orienta el procedimiento, debe aquella someterse al cumplimiento de unos requisitos generales, unos adicionales para determinadas demandas y acompañarse de precisos anexos, como lo regulan los artículos 89 y 90 del Código General del Proceso.

Dada la trascendencia que para el normal desarrollo y buen término del proceso que con ella se inicia tiene tales exigencias, la ley autoriza al juez inadmitir el libelo que no cumpla con las mismas y ordena concederle al actor un término de 5 días para que supere sus falencias, so pena de que se le rechace, artículo 90 del ídem.

Pero asimismo, atendiendo que puede ser la inadmisión obstáculo al derecho de acceso a la justicia, de antaño se ha interpretado que la regulación de las causales de inadmisión de la demanda del artículo 90 es taxativa, no meramente enunciativa, y que, por ende, no puede fundarse la decisión de inadmitir el libelo en causa no señalada expresamente en esa u otra norma legal, con dicho alcance.

Ahora bien, el control del proceder del juez al inadmitir la demanda se logra por vía del recurso de apelación contra el auto que la rechaza por su no subsanación, pues señala el numeral séptimo del citado artículo 90, que aquella comprende la del auto que la inadmitió.

Por lo que resta adentrarse en el estudio de la decisión inadmisoria, para determinar si es ajustada o no a la ley, la exigencia del juez al inadmitir y rechazar el libelo.

2. Establece el artículo 90 del C. G. del P., que hay lugar a inadmitir la demanda cuando ésta carezca de los requisitos formales o de los anexos de ley, se acumulen las pretensiones de manera indebida, no se incluya el juramento estimatorio, no se agote el requisito de procedibilidad de conciliación, entre otros defectos que deben ser corregidos en el término de ley, transcurrido el cual, el juez determine si debe o no ser admitida.

Pues bien, en el presente caso, la inadmisión de la demanda se funda en no haberse aportado los registros civiles de nacimiento de los compañeros permanentes, ya que la juzgadora considera que si bien se aportó el de la compañera demandante no se informó siquiera dónde podía ubicarse el documento para requerir a la autoridad y tampoco se solicitó mediante derecho de petición ante aquella.

3. Al respecto, se advierte que el defecto señalado por la jueza de primer grado no encaja dentro del entendimiento que se le ha dado a la causal primera del artículo 90 del C. G. del P., requisitos formales que se describen en los artículos 82, 83, 84, 85 y 89 ídem y que, para el caso de los juicios declarativos de uniones maritales de hecho, se enmarcan en las exigencias contenidas en la Ley 54 de 1990 y la Ley 979 de 2005.

En efecto, aunque es en esta etapa procesal en la que el juez debe estudiar si la demanda reúne los requisitos legales inadmitiéndola de no ser así para que se completen, sabido es que no cualquier exigencia puede hacerse al actor con dicho propósito, pues las causales de inadmisión se encuentran previstas de manera taxativa en el C.G.P., con el propósito de otorgar certeza y seguridad a los demandantes y garantizar su derecho de acceso a la administración de justicia.

Esto es, que si bien la inadmisión apunta al saneamiento del proceso, con el fin de evitar fallos inhibitorios y nulidades procesales, al momento de estudiar el libelo presentado con el marcado propósito debe considerarse que las exigencias que pueden generar inadmisión y su no subsanación el rechazo del libelo son sólo las taxativamente listadas en la norma procesal.

Bajo ese entendido, salta a la vista que la prueba extrañada por la a-quo en punto a los certificados de nacimiento de los compañeros permanentes no constituye un requisito que habilite la inadmisión y soporte un rechazo de la demanda, pues no aparece como tal incluida en las normas que regulan la materia ni puede considerarse su aporte un anexo obligatorio de la demanda, por ende tampoco su no aporte configura una omisión en los requisitos formales de aquella, habida cuenta de la naturaleza taxativa de las causales de inadmisión.

Tal postura se acompasa con lo señalado en el artículo cuarto de la Ley 54 de 1990 y el artículo 85 del C.G.P., de acuerdo con los cuales, “la existencia de la unión marital de hecho se establecerá por los medios ordinarios de prueba, consagrados en el Código de Procedimiento Civil” y que “con la demanda se deberá aportar la prueba de (...) la calidad de heredero, cónyuge [o] compañero permanente”, esto es, que por la naturaleza de dicho vínculo, es suficiente con que se aporten los medios de convicción que estén en poder de la parte activa o que se soliciten los que se consideren pertinentes para demostrar que aquella tuvo lugar.

Ahora bien, de advertirse necesario el aporte del documento extrañado para efectos de una posible inscripción de la decisión que declare la unión marital, bien puede el funcionario judicial requerir a la parte que allegue el documento o los datos que permitan realizar la inscripción, pero ni aun así puede considerarse que sea este un requisito cuya omisión en su aporte pueda sostener un rechazo de la demanda.

4. Lo expuesto conduce a la revocatoria de la decisión recurrida y que en su lugar proceda el a-quo a proferir auto admisorio de la misma.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Civil-Familia.

RESUELVE

REVOCAR el auto del 3 de diciembre de 2021, proferido por Juzgado Promiscuo de Familia de Soacha, que rechazó la demanda presentada, y en su lugar, se dispone que proceda aquél, a admitirla.

Sin costas en esta tramitación, por no aparecer causadas.

Notifíquese y devuélvase,

JUAN MANUEL DUMEZ ARIAS

Magistrado

Firmado Por:

Juan Manuel Dumez Arias

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional

Dirección Ejecutiva De Administración Judicial

División De Sistemas De Ingenieria

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **c8086a02911efd0252d896847d1b202586ea242184a0f482020def9169526ce5**

Documento generado en 21/05/2022 08:45:18 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>